
Revista
Insurreción
@eln_voces
Edición No.573
Marzo/20/2017

SUMARIO

 @eln_voces

La Violencia del Estado es Causa y NO Consecuencia

De manera intencional los creadores de opinión y analistas oficiales, pretenden presentar la violencia que atraviesa Colombia como fruto del Conflicto Armado y otro tanto lo atribuyen a la violencia producida da por la descomposición social.

Sin embargo, dicha violencia tiene, un origen estatal y puede constatarse a lo largo de la historia de Colombia:

Los aparatos represivos del Estado y de manera especial los servicios de inteligencia han creado desde siempre niveles de laxitud que les permite, ampararse en la ley o traspasarla para cometer sus crímenes que se cubren de impunidad y, es una de las más claras manifestaciones del Terrorismo de Estado.

Sus antecedentes se remontan a la Masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena y la respuesta violenta a los nacientes movimientos revolucionarios de la década de los años 30 del pasado siglo.

Posteriormente se produce el aniquilamiento por parte de los agentes del Estado a sangre y fuego del movimiento gaitanista, que produjo su más sobresaliente impacto con el asesinato de su líder Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948.

Luego de su asesinato la acción represiva de los aparatos estatales se amparó en los brotes de rebeldía popular y se justificó el incremento de los asesinatos.

El surgimiento del llamado Frente Nacional que ilegalizó las expresiones políticas de izquierda. En 1957, fue la medida política de cerrar las posibilidades constitucionales de la lucha legal por el poder desde el pueblo y, a ella le siguió el incremento de los asesinatos políticos con las nuevas prácticas del paramilitarismo, que tuvo sus antecedentes en la llamada época de la violencia, y ahora de nuevo el Estado crea y le da fuerza justificándolo con la urgencia de contener “la amenaza comunista”, dentro del marco de la Guerra Fría y la concepción de la Seguridad Nacional para combatir “el enemigo interno”

No es un secreto que comenzando la década de los 60 del pasado siglo, ya se habían dado los primeros contactos entre militares norteamericanos y oficiales colombianos, que preocupados por la "amenaza comunista" argumentada con el triunfo de la revolución cubana, consideraron urgente crear grupos clandestinos para asesinar dirigentes populares o revolucionarios, grupos que fueron conformados por ex militares y militares activos.

Esta práctica se evidenció luego, en los manuales con los que se instruía a los oficiales latinoamericanos entrenados en las escuelas del Comando Sur de los EEUU acantonada en la república de Panamá.

Lo que ocurrió una década después, fue el incremento de tales grupos, que se justificaba como la necesidad de los campesinos ricos y empresarios, para defenderse de las presiones económicas de la insurgencia, mientras se ocultaba su verdadera razón como política del terrorismo de Estado.

El incremento del paramilitarismo asignado principalmente a oficiales de las FFAA de manera clandestina, le permitió al Estado colombiano, el asesinato de dirigentes populares y de miembros de las organizaciones guerrilleras fuera de combate; sin tener que asumir legalmente su responsabilidad, por ello se convirtió en un arma predilecta que se fue extendiendo, justificándose como combate al narcotráfico y que tuvo su más clara expresión con la creación del llamado grupo de Los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), que luego evidencia la vinculación del Estado con poderosos Empresarios y políticos colombianos.

La teoría de los militares del pentágono que invadían Vietnam en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, de "quitarle el agua al pez", que se llevó con mucha fuerza a la práctica contra aquel pueblo heroico, se trasladó a los gobiernos y ejércitos latinoamericanos donde se desarrollaban movimientos guerrilleros por esos años, teniendo uno de los más experimentados laboratorios en Colombia.

Asesinar dirigentes populares que los servicios secretos consideraban apoyos de la insurgencia en el campo y la ciudad era el objetivo del paramilitarismo.

El incremento del narcotráfico, se desarrollaba de la mano del paramilitarismo y se convirtió en el negocio más lucrativo, pues no solamente se nutría de la exportación de la Coca, sino de las tierras y demás bienes de los cam-





pesinos a los que se asesinaba y desplazaba por millones.

De esta terrible danza del crimen participaban sin escrúpulo militares, políticos, empresarios y comerciantes, inducidos por los servicios de seguridad e inteligencia del Estado, porque dejaba mucho dinero de muy fácil consecución.

La dantesca empresa criminal de responsabilidad directa del Estado en esta oscura noche de la violencia en Colombia, había llegado con altos niveles de desprestigio para el Estado colombiano y su clase gobernante, a los más apartados confines del planeta y recibía la condena de gobiernos y organizaciones internacionales incluyendo a los EEUU, cuyos gobiernos y el pentágono eran parte de sus autores intelectuales.

La misma clase gobernante creadora y propiciadora de esta difícil realidad, veía la urgencia de resolverla y tratar de relegitimarse. Era necesario buscar soluciones y el encargado de ello fue el entonces presidente Uribe, uno de los más comprometidos en dicha empresa criminal. En su segundo mandato hizo un show publicitario presentando una "desmovilización" de más de 30 mil paramilitares.

Salvo una decena de cabecillas con quienes acordó un pacto de perdón bajo determinadas condiciones, los demás fueron absueltos y muchos de ellos volvieron a sus andanzas porque el complejo laberinto de redes entre paramilitares, militares, políticos y empresarios no fue afectado. Si bien disminuyeron notablemente las masacres de pobladores, por el contrario, la acción del narcotráfico, la parapolítica y los asesinatos selectivos a dirigentes populares y defensores de DDHH, lejos de terminar se mantiene, ya que continúa siendo parte de la doctrina militar la persecución de los organismos de inteligencia del Estado a los luchadores populares y miembros de los DDHH.

Ni siquiera hoy cuando se ha publicitado el proceso de paz y el presidente Santos recibió el Premio Nobel, el Terrorismo de Estado disminuye, los grupos paramilitares o agentes estatales en sus prácticas ilegales asesinan dirigentes populares a lo largo y ancho del país, y los grupos paramilitares ahora llamados por el gobierno BACRIM (bandas criminales) siembran el terror de las comunidades en el campo y la ciudades, sin que las FF.AA. asuman su persecución y combate salvo situaciones fortuitas y no como política estatal, pues el Estado sigue necesitando de la mano siniestra para aterrar la población y a las organizaciones populares y sociales que no se resignan al silencio de la dominación.

Como puede constatarse, esta vertiente de violencia es producida por el Estado Colombiano, y se pretende justificar como una estrategia para combatir el alzamiento armado guerrillero. Los productores de opinión y analistas oficiales lo ocultan y solo presentan la violencia que produce el conflicto armado para responsabilizar de ello a la insurgencia, desconociendo que estas son producto de la violencia impuesta por el Terrorismo de Estado.

Solo un gobierno surgido de las corrientes democráticas y de izquierda que recoja el sentir del pueblo y los sectores medios del país, podrá enderezar el futuro de Colombia porque definitivamente la paz que ofrece la clase en el poder es la paz para que todo siga igual y nadie alce la bandera de la rebeldía ante su antidemocracia y su violencia.

Uribe,

Santos y Odebrecht





Comunicado N.7

La Protesta Social Si es Legítima

Desde el día de ayer los líderes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular están realizando una protesta pacífica en la sede del Ministerio del Interior, para exigir el cese a la persecución política en contra de los líderes sociales, que ya cobra 30 asesinatos -6 de ellos contra mujeres-, en lo que va corrido de este año.

La Cumbre protesta por el incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno de Santos, luego de las movilizaciones populares de los años anteriores.

Estos líderes sociales con su protesta desnudan la lógica con que el régimen trata las justas demandas populares, que constituye un Círculo Vicioso, en el que:

1. Las protestas sociales son disueltas por medio de
2. La firma de acuerdos con el gobierno de turno,
3. Quien las incumple,
4. Lo que obliga a los sectores populares a recurrir a las vías de hecho, para rechazar los incumplimientos,



5. Con lo que presiona la realización de unas nuevas conversaciones y acuerdos,
6. En las que el gobierno aprovecha para renegociar los acuerdos originales, para reducir los compromisos que había adquirido.

Nos solidarizamos con esta protesta social y también exigimos que cesen el fuego contra los líderes sociales y de fuerzas alternativas, que se oponen al régimen; persecución que ya constituye un nuevo Genocidio político.

Delegación de Diálogo

Ejército de Liberación Nacional

Quito, marzo 9 de 2017



Comunicado N.9

Carta Abierta

Marzo 17 de 2017

Señor Todd Howland
Representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Señor Christoph Harmisch
Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia

Doctor Carlos Negret
Defensor del pueblo

El día de hoy, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas hizo graves e infundadas denuncias contra el Ejército de Liberación Nacional, relacionándonos con el ataque a líderes sociales.

En aras de la verdad, a la que tiene derecho el país y la comunidad internacional, frente a los graves hechos que se vienen presentando, por el nuevo genocidio que está en curso, les solicitamos contribuir con una actividad investigativa y de verdad, frente a tan temerarias acusaciones. De nuestra parte estamos dispuestos


La mujer alza su voz firme y rebelde



a prestar todo nuestro concurso para que ello se esclarezca.

Con estas falsedades del ministro de defensa, lanzadas en forma ligera a los medios de comunicación, el gobierno busca debilitar nuestros planteamientos en la mesa de conversaciones de Quito, crear confusión sobre el asesinato creciente de líderes sociales, encubrir a los verdaderos responsables y exculparse de su responsabilidad y la de las Fuerzas armadas estatales, frente a tales hechos.

Igualmente, le solicitamos a la Fiscalía que ponga en conocimiento de la opinión publica las investigaciones realizadas en el Departamento del Cauca por el director seccional de la entidad, Raúl Humberto González y el Director seccional del CTI, en las que se indica que la banda acusada del asesinato de varios dirigentes -a causa de la oposición de las comunidades a la explotación minera-, no tiene vínculo, ni relación alguna con el ELN.

Cabe preguntar, ante el silencio del Fiscal, ¿La Fiscalía Cauca no informa o le miente al Fiscal General? ¿El gobierno sabe la verdad sobre estos hechos y miente deliberadamente?

Llamamos a los organismos defensores de los Derechos Humanos, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a todas las gentes de bien de Colombia, a no facilitar el encubrimiento que, con estas declaraciones, pretende hacer el ministro de defensa de sus propias responsabilidades en los crecientes asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Igualmente los invitamos a contribuir en el esclarecimiento de la verdad.

Delegación de Diálogo

Ejército de Liberación Nacional

"Si Hay Información Habrá Participación

Y Se Vencerá el Miedo"

Saludo del Comandante Pablo Beltrán, de la delegación de diálogo del ELN, a los periodistas que cubren el proceso de paz, reunidos en la sede del IEPRI de la Universidad Nacional en Bogotá, el martes 14 de marzo; en la Mesa de Trabajo, "Repensar el ELN: recomendaciones para el cubrimiento periodístico del proceso de paz de Quito".

Hay tres estereotipos que han aplicado desde diferentes sectores a esta Mesa; el primero lo hacen los sectores más recalcitrantes, que se lo aplican al proceso de las FARC y a este, y es que esto es "una gran estafa", y sobre ese estereotipo trabajan en la reducción y el aislamiento del alcance de lo que aquí se puede hacer.

El segundo estereotipo dice que nosotros el Ejército de Liberación Nacional llevamos 25 años en ejercicios de diálogos y de negociación y "nunca llegamos a nada", pero nunca han dicho de los 5 presidentes con quienes hemos hablado, como incumplió cada uno y no asumió sus responsabilidades en cada momento, sino que "toda la culpa es de David, no de Goliat".

Y el tercero, tiene que ver con una matriz de opinión, no sé quién en una emisora dijo, "bueno ya estuvo listo el proceso con las FARC, entonces ya está, entramos en el post-conflicto y esto se arregló", esta es una visión un poco apresurada, que niega lo que mucha gente en Colombia dice, que "esta paz es completa". Y debe ser completa no sólo porque contemple todos los factores de fuerzas insurgentes, sino completa en la medida que, si Usted quiere arreglar un conflicto como este y solamente se limita a hacer un trato sobre armas y deja las condiciones económicas, sociales y políticas, que generan el conflicto armado inalteradas y sin tocar, pues a la vuelta de unos años van a nacer otras guerrillas; entonces esto es estafar a las futuras generaciones.

Sobre esos tres estereotipos es que nosotros tratamos de remontar y entendemos que vamos en una corriente adversa, entonces les pedimos que informen, que animen la participación. Nosotros tenemos un lema, "si hay información hay participación".

Otra solicitud que les hacemos es que no dejen que el miedo se apodere de la gente y que ayuden a esclarecer lo que está pasando en los ataques contra los líderes sociales; si esto se esclarece y se logra actuar sobre esos factores adversos del proceso, con seguridad vamos a animar la participación.

Muchas gracias por reunirse y pensar cómo sacar adelante este proceso.

Lucía Serrano

Cleptocracia

A la Colombiana

La ilusión de un Estado que garantice los derechos de los colombianos parece irse cada día más al barranco. Los escándalos de corrupción no solo son aberrantes, en su conjunto permiten afirmar que en Colombia reina la Cleptocracia.

La cleptomanía es un trastorno de conducta en el que una persona es adicta al robo. Como todo trastorno, depende en gran parte de la capacidad del paciente para reconocer el problema y luchar contra él, su solución. El Estado Colombiano se ha vuelto cleptómano, ya que no es una ni dos de sus instituciones las que han sido relacionadas con la corrupción, es el conjunto del aparato estatal, el que ha robado a los colombianos, obligándonos a vivir en la Cleptocracia, el Estado del robo.

El presidente Santos a través de sus campañas presidenciales se encuentra relacionado con los sobornos de Odebrecht. Ante las acusaciones ha respondido que, "se hizo a sus espaldas" y que espera que se lleven a cabo las investigaciones, mientras paradójicamente quienes deben investigar no investigan por vencimiento de términos. En otros lugares del hemisferio -no en Colombia- la corrupción ligada a altos dignatarios implica su destitución. La campaña presidencial de Zuluaga también se ha visto involucrada, demostrando que el conjunto de la oligarquía, el Santismo y el Uribismo, han estafado al país.

Los gabinetes ministeriales de los gobiernos de Uribe y Santos se han visto envueltos en su conjunto en el robo al país. El Ministerio de Agricultura tuvo que responder por Agro Ingreso Seguro, el Ministerio de Protección Social por el cierre de Saludcoop y la crisis de Cafesalud, el Ministerio de Transporte por el caso de Odebrecht, El Ministerio de Educación y el Bienestar Familiar por la crisis de alimentación de los colegios públicos en departamentos como Córdoba y la Guajira, el Ministerio de Minas y Energía por el escándalo de Reficar y el favorecimiento a privados en el otorgamiento de licencias de explotación. Las Agencias Nacional de Infraestructura -ANI y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA a punta de sobornos han otorgado permisos y licencias de operación.

Buena parte de las gobernaciones y alcaldías, se han robado los presupuestos municipales dejando a las regiones más apartadas y pobres del país sin vías, sin acueducto y con desnutrición. Además, las superintendencias se han hecho las de la vista gorda, al solo iniciar a investigar los robos ya consumados. Incluso la rama judicial que debe garantizar el proceso de investigación y juzgamiento a los ladrones de cuello blanco, favorece a los sectores privados, es bien recordado el caso del Magistrado Pretelt o las acusaciones actuales contra el Fiscal General de la Nación.

Qué decir del Congreso de la República, donde congresistas como Otto Bula son los encargados de servir de enlaces, recibir las coimas y aprobar los proyectos de ley que favorecen a empresas privadas.

Lo que hay detrás de este desastre que reina en el Estado y del cual aún no conocemos todo, es la conducta enferma de la oligarquía colombiana que se dedica a robar al pueblo para saciar sus intereses; por lo tanto, ni es un asunto únicamente del gobierno de Santos, ni se trata de simples manzanas podridas. El aparato estatal colombiano sigue cooptado y cercado por una clase política que tiene como función enriquecerse a costa del trabajo de las mayorías, y como buena cleptómana se niega a reconocer su enfermedad y su responsabilidad bajo la cortina de los casos aislados, sin mostrar voluntad de cambio.

Para lograr su cometido la oligarquía ha incorporado la privatización propia del modelo neoliberal como un mecanismo que permite desfalcar las arcas del Estado, y por supuesto a los colombianos. La totalidad de los casos de corrupción involucran el favorecimiento de intereses y/o operadores privados que prestan -servicios- que en principio debiera prestar el



Estado, ya que más que simples servicios, son los derechos del pueblo los que están en juego y una vez más las alianzas público-privadas las que se encargan de negarlos. La privatización permite que quienes están en el aparato estatal se laven las manos diciendo que la corrupción fue culpa de los privados y que ellos tenían los brazos amarrados, pero el pueblo no debe olvidar que es la misma clase la que actúa en el Estado y en las empresas privadas.

Esta estrategia ha sido utilizado desde la creación de la constitución política de 1991 y compromete al conjunto de la clase que históricamente ha detentado el poder. En la actualidad el escándalo centrado en el gobierno de Santos, no obedece a una preocupación por la corrupción en el país, en cambio demuestra la disputa interoligárquica entre el Santismo y el Uribismo, donde el segundo saca pecho culpando al primero. La corrupción se vuelve un tema de moda en el periodo preelectoral, pero poco se escudriña en el fondo sobre la responsabilidad del periodo de Uribe en la consolidación de este tipo de política en el país.

Siendo así, se demuestra en la práctica que el Estado roba a los colombianos para favorecer a los ricos del país, y al negarse a asumir de manera directa la defensa de los derechos de las mayorías, ha convertido los derechos en un negocio con el que se reparten las ganancias los poderosos. Contribuir a una paz justa y verdadera implica frenar el modelo de privatización de los derechos, aclarar la responsabilidad de los grandes capitales en el desfalco del Estado y discutir el papel de las empresas públicas en la consolidación de una economía nacional soberana.

Si la cleptocracia en la que vivimos se sigue escondiendo detrás de la democracia, la voluntad y la legitimidad de la oligarquía se hace más chica y los reparos del pueblo se hacen más justos; hay que recordarle a la clase en el poder que la desconfianza se elimina con hechos y no con promesas.

Ximena Solano Sepúlveda

Encendida la Llama Latinoamericana

Después de una década de gobiernos alternativos y progresistas, el continente se sigue derechizando. La oligarquía recuperó el poder en varios países a través de golpes parlamentarios y falsedades electorales, denunciado la supuesta falta de democracia en nuestros países. Hoy en nuestros pueblos se manifiesta la falta de democracia, pero esta es causada por la misma oligarquía continental, la actual responsable de las fuertes protestas alrededor de nuestramérica.

El cambio de rumbo

Argentina, Brasil, Chile y Perú, tienen en común una historia de expropiación reciente de los derechos del pueblo. Los primeros dos, contaron con la existencia de gobiernos progresistas quienes, en medio de las dificultades y contradicciones propias de combatir el modelo neoliberal, lograron mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fortalecieron la inversión social y las prestaciones sociales del pueblo trabajador. En el caso de Chile, fueron las luchas de estudiantes y trabajadores las que lograron mitigar la andanada neoliberal que persistió a contracorriente de todo el continente. Perú por su parte ajeno también a los cambios progresistas, continuó con el impulso a ultranza de las directrices de Washington.

Lo común de estos países es la intención de sus gobernantes actuales de profundizar el modelo neoliberal. Es lógico que esta directriz que pretende instaurarse en el continente, es una respuesta drástica de las élites criollas a la potencialidad de transformaciones que gobiernos alternativos y movimientos sociales han desarrollado a lo largo de los años.

El formato es el mismo, gobiernos que pretenden cambiar el supuesto mal gobierno, han llegado al poder de manera ilegítima ante los ojos de los habitantes de sus territorios. Desde la estrategia de golpe parlamentario inventada en Brasil, pasando por la guerra mediática que acusa de narcotráfico, corrupción -robo- a los gobiernos anteriores, hasta la guerra diplomática auspiciada por Estados Unidos y seguida por Europa, fueron las formas fraudulentas con las que se ha contra informado y engañado a parte del pueblo de estos países.

La implementación del modelo

Luego de hacerse al poder las élites del continente han demostrado su verdadero carácter. En Argentina y Chile han generado desmejoramiento de la educación pública, incluyendo la calidad de vida de los trabajadores del sector. En Brasil el gobierno de Temer buscó imponer una reforma estructural que señalaba el congelamiento del presupuesto público por 10 años, sin importar las afectaciones sociales que desencadenaría, así mismo busca instaurar una ley que desmantela el modelo de prestaciones sociales actual, aumentando la edad y requisitos de jubilación. El gobierno peruano por su parte se encarga de desmantelar la educación pública y los derechos de los trabajadores, mientras limita sus recursos en la atención de la catástrofe invernal que deja decenas de muertos.

Estas medidas tienen un doble fin. Por un lado, es consecuencia de la visión de las élites latinas donde la inversión social es vista como un gasto innecesario, pues sus beneficios no se ven en el corto plazo. Se prioriza así la inversión en seguridad y defensa como la única necesaria, mientras las demás necesidades del pueblo -salud, educación, vivienda- se dejan a la libre oferta y demanda del mercado, vistas como un negocio con el que se lucran las empresas privadas nacionales y trasnacionales. Por otro lado, a través de estas medidas se busca eliminar la organización de la clase popular, ya que, al flexibilizar y deteriorar las con-



diciones de vida de los trabajadores, evitan el reconocimiento de estas necesidades como derechos y limitan de esta manera su exigencia.

A pesar de las múltiples expresiones internacionales, incluso del mismo Fondo Monetario Internacional, que reconoce el fracaso del neoliberalismo en el mundo, los gobiernos de turno de nuestro territorio continúan con las recetas implantadas, como una forma de recordarle al pueblo latino que con la élite no se juega, pues está dispuesta a lo que sea necesario por conservar el poder.

La respuesta de los pueblos

En la lucha de clases que libran nuestros pueblos, la resistencia no da tregua ante el desmonte de los derechos. La élite criolla creyó que con eliminar los gobiernos progresistas era suficiente para apropiarse de nuestros países, pero como siempre ha desestimado que es el pueblo organizado y movilizado el que mantiene vivos los proyectos de justicia social.

Podrían catalogarse las manifestaciones contra el gobierno de Temer en Brasil y de Macri en Argentina como las más grandes de su historia reciente. Movilizaciones de miles de personas en distintas ciudades de estos países, han demostrado que el pueblo organizado no solo está dispuesto a defender los avances sociales logrados durante la década anterior, sino que está dispuesto a profundizarlos y generar una crisis de gobernabilidad a las élites del continente.

Las movilizaciones actuales son producto de un largo periodo de fortalecimiento de los movimientos sociales en estos países. El Movimiento Sin Tierra -MST- de Brasil, el Frente Popular Darío Santillán y la organización Barrios de Pie en Argentina, organizaciones con una larga trayectoria de lucha, han logrado avanzar de manera decidida en la construcción de movimientos sociales amplios en la búsqueda de la justicia social de sus países. El camino de la organización y movilización popular se debe convertir en un ejemplo de lucha para el pueblo colombiano en la búsqueda de una paz justa y verdadera.

